

## **SOCIEDAD CIVIL EXPRESA INQUIETUDES SOBRE ESTABILIDAD DEMOCRATICA EN REPUBLICA DOMINICANA**

Por Miriam Diaz, socióloga y profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.  
Miembro fundador de Participación Ciudadana.  
Presidió la organización en el período febrero 2003-febrero 2004.  
Actualmente es miembro de varias comisiones de trabajo y representante ante la Red Interamericana para la Democracia

Después de una década de sostenido crecimiento económico y significativos avances democráticos, la República Dominicana se encuentra sumida en estos momentos en una grave crisis económica, acompañada por signos preocupantes de retroceso político. En mayo del 2003, el Banco Central dio a conocer un detallado expediente de un colosal fraude cometido por el principal Banco del país, el BANINTER, por un monto superior a más de 3,000 millones de dólares, aproximadamente 70% del presupuesto del país.

La denuncia estableció que, por más de 14 años el BANINTER sustrajo los recursos de los depositantes, invirtiéndolos en decenas de empresas, propiedad de sus principales accionistas y directivos, entre las cuales se encontraban cuatro periódicos, decenas de canales de televisión y emisoras de radio, aviones, helicópteros y yates. Pero además, de esos recursos se pagaban los viajes y tarjetas de créditos ilimitadas de los dos últimos presidentes de la República, el actual Hipólito Mejía y el pasado, Leonel Fernández, quienes además usan vehículos donados por el referido Banco. El quebrado BANINTER financiaba las campañas electorales de los principales partidos y tenía en su nómina a 70 generales del ejército y la policía, decenas de políticos y a cientos de comunicadores, entre otros. Posteriormente se produjeron las quiebras de otros dos importantes bancos, cuyos directivos, según las autoridades nacionales, incurrieron en prácticas igualmente fraudulentas.

A raíz de la denuncia de estos fraudes, 52 organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por Participación Ciudadana, celebraron tres actos masivos, uno en la capital y dos en ciudades del norte y el sur del país, en los que exigieron el sometimiento a la justicia de los acusados de fraude y la publicación de más información sobre las razones por las cuales la supervisión gubernamental no detectó a tiempo las irregularidades. Se solicitó la destitución y el sometimiento a la justicia de los funcionarios responsables. El presidente Mejía se limitó a cambiar a posiciones de igual o mayor relevancia a los funcionarios responsables de la supervisión bancaria.

Las 52 organizaciones de la sociedad civil crearon una Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, la cual ha mantenido acciones permanentes desde junio del 2003 en la exigencia de una justicia eficiente y en la denuncia de las violaciones a la institucionalidad que se producen en el país.

Las medidas tomadas por las autoridades para devolver, a base de dinero inorgánico, sumas multimillonarias, algunas en dólares depositadas en filiales del exterior de los bancos quebrados, han dado como resultado una devaluación en más de 200% de la moneda en poco más de un año, lo cual ha provocado un nivel de inflación que en el 2003 sobrepasó el 40% y continua de manera acelerada en el presente 2004.

A esta grave situación económica se suman fuertes preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil sobre la posibilidad de retrocesos democráticos. Una de ellas es que el Partido en el Gobierno, valiéndose de su mayoría Congresional reintrodujo en la Constitución de la República la reelección presidencial y designó una Junta Central Electoral compuesta en su mayoría por allegados al partido oficial y que no ha logrado ganar la confianza de la ciudadanía. La reforma de la Constitución se produjo contra una fuerte oposición de la sociedad civil que propugnó por el mantenimiento de la prohibición de reelección, basado en que, desde la fundación de la República, ésta ha sido fuente de fraudes electorales y corrupción. La sociedad civil también perdió la batalla por la designación de una Junta Central Electoral independiente de los partidos políticos y que gozara de la confianza ciudadana.

El otro hecho preocupante es que, después de nueve meses de luchas internas en el oficial Partido Revolucionario Dominicano (PRD) éste ha quedado dividido, debido a que la mayoría de los aspirantes a la candidatura se opusieron a la repostulación del Presidente Mejía y denunciaron maniobras antidemocráticas y uso de los recursos estatales para obtener dicha candidatura.

A pesar de la división de su partido, el Presidente Mejía logró que la Junta Central Electoral lo favoreciera con un dictamen que prácticamente oficializa su candidatura y le otorga el dominio total del partido.

Representantes de más de 50 organizaciones de la sociedad civil de República Dominicana se reunieron el lunes 2 de febrero con el objetivo de discutir un plan de acción para reforzar y apoyar el trabajo que realiza el Movimiento Cívico Participación Ciudadana con miras a observar las elecciones presidenciales que se celebrarán en mayo próximo.

Participación Ciudadana es un movimiento cívico no partidista de presión y concertación con los poderes públicos, creado en 1993 por un grupo de profesionales con largo historial de lucha democrática, como un medio de participación de la ciudadanía en la construcción de la democracia. Se fundamenta en una dirección y membresía nacional voluntaria y un equipo técnico contratado.

Ha observado las elecciones presidenciales del 1996 (primera y segunda vuelta) y el 2000, así como las elecciones para el congreso y los municipios del 1998 y el 2002. También ha sido invitada por dos de los principales partidos políticos a observar sus elecciones primarias. La participación de los observadores ha sido considerado un factor que contribuye a la limpieza de las elecciones dominicanas, sobre todo porque Participación Ciudadana también ha realizado, en todos los casos, un conteo rápido con excelentes resultados. La Junta Central Electoral otorga permiso y facilidades, tanto a los observadores de Participación Ciudadana como a los representantes de organismos internacionales.

En sus más de 10 años de existencia, Participación Ciudadana ha trabajado principalmente en las siguientes líneas: reforma electoral y elecciones limpias, reformas

políticas; mejoramiento de la justicia; plataforma judicial y acciones anticorrupción; educación y movilización ciudadana, articulación de la sociedad civil, entre otros.

Tiene relaciones y coordina acciones con los principales organismos que realizan observación electoral, como CAPEL, CENTRO CARTER, NDI (Nacional Democratic Institute) y la OEA.

Recientemente, la sociedad civil ha expresado fuertes preocupaciones sobre el desarrollo del proceso electoral, sobre todo después que legisladores del partido oficial introdujeron en el Congreso Nacional, a finales de diciembre del 2003, un proyecto de Ley de Lemas que permitiría a los partidos presentar en la boleta electoral hasta cinco candidatos a la presidencia e igual número a la vicepresidencia.

El proyecto ha recibido el rechazo de todos los sectores nacionales, a excepción del grupo oficialista, fundamentado en primer lugar en que el mismo viola el principio constitucional del voto directo, al permitir la sumatoria de votos dentro de los candidatos de un mismo partido. Otra importante objeción al proyecto es que pretende modificar la Ley Electoral, apenas a tres meses de las elecciones. Dos de los tres partidos mayoritarios, así como otros minoritarios, eligieron sus candidatos presidenciales bajo las directrices de la legislación vigente y la Junta Central Electoral dejó en enero abierto el proceso y tiene adelantados todos los preparativos del mismo. La semana del 9 al 13 de febrero el Congreso Nacional fracasó por falta de quórum en la Cámara de Diputados, en los intentos de aprobar el citado proyecto. El Presidente de los diputados declaró que no lo pondrá más en agenda debido a la fuerte oposición que generó.

Participación Ciudadana se propone realizar la observación de las elecciones con más de 6,000 observadores en todos los centros de votación del país, además de un conteo rápido de los resultados. Este trabajo lo ha realizado desde el 1996, debido a una larga historia de fraudes electorales en República Dominicana. En estos momentos en que el actual Presidente Hipólito Mejía aspira a la reelección, han surgido de nuevo las preocupaciones sobre posibles irregularidades en el proceso. Estas mismas preocupaciones han sido expresadas por diversos organismos internacionales y representantes diplomáticos, entre los que se cuentan la OEA, y las representaciones de Naciones Unidas y la Unión Europea, han manifestado su interés de enviar observadores a las próximas elecciones. MIRIAM DIAZ 10 de febrero del 2004. Miriam Díaz es socióloga, profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Miembro fundador de Participación Ciudadana. Presidió la organización en el período febrero 2003-febrero 2004. Actualmente es miembro de varias comisiones de trabajo y representante ante la Red Interamericana para la Democracia.

Febrero de 2004

*Las opiniones expresadas en este trabajo son las de la autora y no se corresponden necesariamente con las de la Fundación Canadiense para las Américas (FOCAL)*